

Resumen

En el caso Valenzuela Contreras contra España relativo a la interceptación de la línea de teléfono del demandante y posterior condena del mismo el TEDH condena a este país por violación del art.8 al considerar que la legislación española aplicada en aquel tiempo no indicaba con suficiente precisión y certeza el grado de discreción de las autoridades.

NORMATIVA ESTUDIADA

Conv. de 4 noviembre 1950. Convenio Europeo para la Protección Derechos Humanos y Libertades Fundamentales art.8 , art.50

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHO AL RESPETO DE LA VIDA PRIVADA
INDEMNIZACIÓN POR VIOLACIONES DEL CONVENIO
EN GENERAL
INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Procedimiento ante el TEDH

Legislación

Aplica art.8, art.50 de Conv. de 4 noviembre 1950. Convenio Europeo para la Protección Derechos Humanos y Libertades Fundamentales

Jurisprudencia

- Citada en el mismo sentido por ATC Sala 1ª de 23 febrero 2001 (J2001/11585)
- Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - INTIMIDAD E INVOLABILIDAD - Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen - Secreto de las comunicaciones - Escuchas telefónicas por STC Sala 2ª de 29 enero 2001 (J2001/461)
- Citada en el mismo sentido sobre DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR - SECRETO DE LAS COMUNICACIONES - Intervención telefónica - En general por SAP Madrid de 30 diciembre 2002 (J2002/99478)
- Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 1 diciembre 2003 (J2003/236060)
- Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 17 diciembre 2003 (J2003/237827)
- Citada en el mismo sentido sobre DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR - SECRETO DE LAS COMUNICACIONES - Intervención telefónica - Aptitud para enervar la presunción de inocencia por SAP Madrid de 2 febrero 2004 (J2004/105034)
- Citada en el mismo sentido sobre DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA - DROGAS TÓXICAS Y ESTUPEFACIENTES - Proceso penal - Prueba - Intervención telefónica por SAP Madrid de 30 julio 2004 (J2004/138048)
- Citada en el mismo sentido sobre DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA - DROGAS TÓXICAS Y ESTUPEFACIENTES - Proceso penal - Prueba - Intervención telefónica por STS Sala 2ª de 19 septiembre 2004 (J2004/143919)
- Citada en el mismo sentido por SAP Asturias de 29 noviembre 2004 (J2004/194040)
- Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - LIBERTAD DE RESIDENCIA Y CIRCULACIÓN por STS Sala 3ª de 27 octubre 2004 (J2004/242566)
- Citada en el mismo sentido por SAP Vizcaya de 5 noviembre 2004 (J2004/254446)
- Citada en el mismo sentido sobre DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR - SECRETO DE LAS COMUNICACIONES - Intervención telefónica - Motivación por SAP Madrid de 18 octubre 2004 (J2004/277447)
- Citada en el mismo sentido sobre DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA - DROGAS TÓXICAS Y ESTUPEFACIENTES - Proceso penal - Prueba - Entrada y registro por SAP Vizcaya de 29 abril 2005 (J2005/130629)
- Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - INTIMIDAD E INVOLABILIDAD - Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen - Secreto de las comunicaciones - Intervención de las comunicaciones - Alcance por STC Sala 2ª de 18 julio 2005 (J2005/130787)
- Citada en el mismo sentido por STC Sala 2ª de 26 septiembre 2005 (J2005/157460)
- Citada en el mismo sentido sobre DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR - SECRETO DE LAS COMUNICACIONES - Intervención telefónica - Motivación por SAP Madrid de 28 marzo 2005 (J2005/182872)
- Citada en el mismo sentido sobre DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR - SECRETO DE LAS COMUNICACIONES - Intervención telefónica - Control judicial por SAP Burgos de 21 octubre 2005 (J2005/208224)
- Citada en el mismo sentido por SAP Valencia de 23 septiembre 2005 (J2005/211577)
- Citada en el mismo sentido sobre DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR - SECRETO DE LAS COMUNICACIONES - Intervención telefónica - Control judicial por SAP Burgos de 18 octubre 2005 (J2005/215067)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR - SECRETO DE LAS COMUNICACIONES - Intervención telefónica - Control judicial por SAP Madrid de 29 noviembre 2005 (J2005/219888)

Citada en el mismo sentido por SAP Barcelona de 12 abril 2005 (J2005/279981)

Citada en el mismo sentido por SAP Barcelona de 21 diciembre 2005 (J2005/313263)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 12 diciembre 2005 (J2005/328859)

Citada en el mismo sentido sobre DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA - DROGAS TÓXICAS Y ESTUPEFACIENTES - Proceso penal - Prueba - Intervención telefónica por SAP Baleares de 1 abril 2005 (J2005/83969)

Citada en el mismo sentido sobre DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA - DROGAS TÓXICAS Y ESTUPEFACIENTES - Proceso penal - Prueba - Intervención telefónica por SAP Valencia de 16 mayo 2005 (J2005/95517)

Citada en el mismo sentido por SAP Baleares de 19 junio 2006 (J2006/113183)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 3 febrero 2006 (J2006/11988)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 31 enero 2006 (J2006/11990)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 20 febrero 2006 (J2006/278206)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR - SECRETO DE LAS COMUNICACIONES - Intervención telefónica - Control judicial por STS Sala 2ª de 6 abril 2006 (J2006/282158)

Citada en el mismo sentido por SAP Baleares de 16 noviembre 2006 (J2006/306705)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 28 junio 2006 (J2006/356035)

Citada en el mismo sentido por SAP Teruel de 5 diciembre 2006 (J2006/396872)

Citada en el mismo sentido por SAP Guipúzcoa de 3 noviembre 2006 (J2006/417761)

Citada en el mismo sentido por SAP Orense de 6 noviembre 2006 (J2006/465815)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 4 abril 2006 (J2006/59582)

Citada en el mismo sentido por SAP Asturias de 6 abril 2006 (J2006/69250)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - INTIMIDAD E INVOLABILIDAD - Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen - Secreto de las comunicaciones - Escuchas telefónicas, DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - INTIMIDAD E INVOLABILIDAD - Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen - Secreto de las comunicaciones - Intervención de las comunicaciones - Motivación por STC Sala 2ª de 30 enero 2006 (J2006/7794)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 30 mayo 2007 (J2007/122112)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 11 junio 2007 (J2007/122119)

Citada en el mismo sentido por SAP Barcelona de 6 junio 2007 (J2007/161890)

Citada en el mismo sentido por SAP Baleares de 22 junio 2007 (J2007/166804)

Citada en el mismo sentido por SAP Santa Cruz de 7 diciembre 2007 (J2007/322459)

Citada en el mismo sentido por SAP Alicante de 21 diciembre 2007 (J2007/338029)

Citada en el mismo sentido por SAP Santa Cruz de 11 diciembre 2007 (J2007/340171)

Citada en el mismo sentido por SAP Tarragona de 2 mayo 2007 (J2007/349401)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 18 mayo 2007 (J2007/40243)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - CUESTIONES GENERALES - Interpretación con arreglo a la Declaración Universal y otros textos internacionales por STS Sala 2ª de 23 enero 2007 (J2007/5415)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 28 junio 2007 (J2007/80241)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 5ª de 12 junio 2007 (J2007/92426)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR - SECRETO DE LAS COMUNICACIONES - Intervención telefónica - Valor probatorio por STS Sala 2ª de 24 julio 2008 (J2008/128084)

Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Gra) de 7 agosto 2008 (J2008/131342)

Citada en el mismo sentido por SAP Asturias de 17 julio 2008 (J2008/201044)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 28 octubre 2008 (J2008/244000)

Citada en el mismo sentido por SAP Sevilla de 17 diciembre 2008 (J2008/352477)

Citada en el mismo sentido por SAP Barcelona de 13 febrero 2008 (J2008/50581)

Citada en el mismo sentido por SAP Barcelona de 12 marzo 2008 (J2008/50653)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 8 abril 2008 (J2008/56469)

Citada en el mismo sentido por SAP Alicante de 7 mayo 2009 (J2009/128482)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 20 octubre 2009 (J2009/245675)

Citada en el mismo sentido por SAP Valladolid de 19 mayo 2009 (J2009/314586)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 16 junio 2009 (J2009/399598)

Citada en el mismo sentido por SAP Asturias de 11 febrero 2009 (J2009/47456)

Citada en el mismo sentido por SAP Burgos de 4 mayo 2009 (J2009/50677)

Citada en el mismo sentido por SJdo. Penal de 4 mayo 2009 (J2009/62733)

Citada en el mismo sentido por SAP Alicante de 17 marzo 2009 (J2009/73308)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 2 junio 2010 (J2010/152975)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 22 junio 2010 (J2010/153030)

Citada en el mismo sentido por TSJ Madrid Sala de lo Penal de 27 enero 2010 (J2010/1898)

Citada en el mismo sentido por SAP Salamanca de 3 marzo 2010 (J2010/50207)
Citada en el mismo sentido por AP Salamanca de 1 febrero 2010 (J2010/50225)
Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 9 junio 2011 (J2011/120524)
Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 1 junio 2011 (J2011/131043)
Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 26 abril 2011 (J2011/131778)
Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 21 febrero 2011 (J2011/16393)
Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 25 febrero 2011 (J2011/19671)
Citada en el mismo sentido por SAP Valencia de 8 julio 2011 (J2011/200329)
Citada en el mismo sentido por SAP Valencia de 14 julio 2011 (J2011/207390)
Citada en el mismo sentido por SAP Asturias de 11 noviembre 2011 (J2011/294715)
Citada en el mismo sentido por SAP Toledo de 28 noviembre 2011 (J2011/303350)
Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 3 noviembre 2011 (J2011/324501)
Citada en el mismo sentido por SAP Burgos de 22 febrero 2011 (J2011/40615)
Citada en el mismo sentido por SAP Asturias de 14 febrero 2011 (J2011/45637)
Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 27 enero 2012 (J2012/24639)
Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 12 abril 2012 (J2012/65129)
Citada en el mismo sentido por SAP Badajoz de 25 enero 2012 (J2012/9325)

Bibliografía

Citada en "La reforma del "secreto de las actuaciones". Foro abierto"

Versión de texto vigente null

Sinópsis Antecedentes:

El señor Valenzuela Contreras era sospechoso de molestar y amenazar a su ex-novia y al novio de ésta mediante frecuentes llamadas telefónicas y envío de cartas. Durante la fase de investigación de los hechos, el juez de instrucción acordó la interceptación de la línea de teléfono del señor Valenzuela durante un mes. Dicha medida fue ordenada basándose en el art. 18.3 CE, y en el Tít. VIII del Lib. II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acerca "de la entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica", antes de su modificación por la Ley 4/1988. Con posterioridad, el sospechoso fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid, que señaló que el control telefónico no había sido decisivo para establecer la culpabilidad del acusado, sino que se tuvieron en cuenta todas las evidencias en conjunto. El acusado recurrió la resolución infructuosamente ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional, alegando el incumplimiento de los arts. 24 y 18 de la CE, quienes confirmaron la corrección de la resolución de la Audiencia.

Valenzuela Contreras: El señor Valenzuela acudió ante la Comisión alegando la violación de los arts. 6.1 y 8 del Convenio, al afirmar que no había tenido un juicio justo, que su culpabilidad no había sido establecida por medios legales, y que la intervención de su línea telefónica infringió su derecho a la vida privada. La Comisión admitió a trámite su demanda en relación a la violación del art. 8, declarando inadmisibile el resto (11 votos a 6).

Sobre la violación del art.8:

Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el demandante mantuvo que la intervención de su teléfono violó su derecho al respeto a su vida privada protegida por el art. 8. El TEDH consideró que la aplicabilidad del artículo era clara en este caso, ya que según su jurisprudencia las llamadas telefónicas desde la casa de una persona se incluyen en la noción de "vida privada" y "correspondencia" del art. 8. En relación a su posible incumplimiento, el Tribunal tuvo en cuenta los principios establecidos por su jurisprudencia (caso Kopp c. Suiza, 1998), que señalaban que la interceptación de las conversaciones telefónicas constituye una intromisión de la autoridad pública en el derecho al respeto de la vida privada y de la correspondencia, a menos que se produzca "de conformidad con la ley", que se persiga uno o más fines legítimos de los enunciados en el art. 8.2, y que sea "necesaria en una sociedad democrática". El primer requisito supone no solo que la medida se base en leyes nacionales, sino también se refiera a la cualidad de dichas leyes, que tendrán que ser accesibles para las personas interesadas, y las consecuencias de su aplicación deberán ser previsibles. En este caso, el Tribunal consideró que la legislación española aplicada en aquel tiempo no indicaba con suficiente precisión y certeza el grado de discreción de las autoridades en la esfera de las medidas de intervención de las comunicaciones telefónicas, y la manera en que debía ser ejercido. Resolución e indemnización.

Por lo tanto, el TEDH consideró unánimemente que el art. 8 fue violado. Y en aplicación del art. 50, el Estado fue condenado al reembolso de las costas y gastos del demandante.

VERSION OFICIAL EN FRANCÉS

SENTENCIA

En l'affaire Valenzuela Contreras c Espagne[fn2],

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A[fn3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :

M. R. Bernhardt, président,

Mme E. Palm,
M. A.N. Loizou,
M. J.M. Morenilla,
Sir John freeland,
M. A.B. Baka,
M. L. Wildhaber,
M. J. Casadevall,
M. V. Butkevych,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 mars et 30 juin 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCEDURE

1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 mai 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 27671/95) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cosme Valenzuela Contreras, avait saisi la Commission le 2 mai 1995 en vertu de l'article 25.

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 8 de la Convention.

2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à employer la langue espagnole (article 27).

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 27 août 1997, celui-ci a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir M. B. Walsh, Mme E. Palm, M. A. Loizou, M. A.B. Baka, M. L. Wildhaber, M. J. Casadevall et M. V. Butkevych (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Par la suite, M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, a remplacé M. Ryssdal, décédé le 18 février 1998 (article 21 § 6, second alinéa, du règlement A) et Sir John Freeland, juge suppléant, a remplacé M. Walsh, décédé le 9 mars 1998 (article 22 § 1).

4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal avait consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement espagnol (« le Gouvernement »), l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence le 30 septembre 1997, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant le 15 décembre 1997. Le 19 janvier 1998, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué n'entendait pas répondre par écrit.

5. Le 19 janvier 1998, la Commission a fourni le dossier de la procédure devant elle, comme le greffier le lui avait demandé sur les instructions du président.

6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, qui avait également autorisé l'agent du Gouvernement à employer la langue espagnole à l'audience (article 27 § 2 du règlement A), les débats se sont déroulés en public le 26 mars 1998 au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu :

- pour le Gouvernement

M. J. BORREGO BORREGO, chef du service juridique pour la
Commission et la Cour européennes des Droits de
l'Homme, ministère de la Justice, agent;

- pour la Commission

M. M. A. NOWICKI, délégué;

- pour le requérant

Me J. C. RUBIO MORENO, avocat au barreau de Madrid, conseil.

La Cour a entendu M. Nowicki, Me Rubio Moreno et M. Borrego Borrego.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE

7. Ressortissant espagnol né en 1952, le requérant est sous-chef du personnel de la société W.

A. La genèse de l'affaire et le déroulement de l'enquête

8. Le 12 novembre 1984, suite à la plainte contre X déposée par Mme M., salariée de la société W., auprès du juge d'instruction n° 31 de Madrid pour injures et menaces téléphoniques et écrites, une information judiciaire (*diligencias previas*) fut ouverte. Le 6 février 1985, M. R., fiancé de Mme M., déposa plainte contre X pour les mêmes faits.
9. Les 8 janvier et 19 février 1985, le juge d'instruction ordonna, en vertu de l'article 18 § 3 de la Constitution et sur demande de Mme M. et M. R., formulée lors de leur déposition, la mise sur table d'écoute de leurs lignes téléphoniques pour une durée d'un mois. Plusieurs appels suspects effectués depuis la société W. ou à partir de cabines téléphoniques, furent interceptés.
10. Les 18 février et 25 mars 1985 respectivement, la mise sur table d'écoute fut supprimée.
11. Le 29 mars 1985, Mme M. dévoila devant le juge d'instruction les noms des cinq personnes, dont le requérant, ayant accès au numéro de poste de la société W. à partir duquel certains des appels suspects avaient été effectués.
- Le même jour, trois autres personnes furent citées à comparaître. La société W. fut priée d'apporter de précisions sur les bureaux et les personnes correspondant aux numéros de téléphone litigieux.
12. Le 30 avril 1985, le juge d'instruction ordonna à nouveau la surveillance des lignes téléphoniques de Mme M. et M. R. pour une période allant du 1er au 31 mai 1985. Il ordonna également l'étude de l'écriture des lettres anonymes contenant des menaces à l'encontre de Mme M., en vue de déterminer le modèle de la machine à écrire utilisée pour les rédiger, ainsi que des photographies jointes à certaines des lettres. Il fit également examiner les restes de salive et les empreintes se trouvant sur les enveloppes.
13. Le 7 juin 1985, la cassette contenant l'enregistrement des appels effectués aux numéros surveillés, dont certains révélaient que des menaces et des insultes avaient été proférées à l'encontre de Mme M., fut remise au juge d'instruction.
14. Le 19 novembre 1985, le juge d'instruction ordonna, en se fondant sur l'article 18 § 3 de la Constitution (paragraphe 29 ci-dessous) et prenant en considération le titre VIII du livre II du code de procédure pénale « portant sur l'entrée et les perquisitions dans un endroit fermé, l'examen des livres et des pièces écrites et sur l'interception et l'ouverture de la correspondance écrite et télégraphique » (paragraphe 30 ci-dessous), la mise sur table d'écoute des lignes téléphoniques privées de S. et de M. Valenzuela, chef et sous-chef du personnel respectivement, de la société où le requérant travaillait, pour une durée d'un mois à partir du 26 novembre 1985. Le requérant apparaissait en effet comme le principal suspect, compte tenu, d'une part, du fait que la plupart des appels étaient effectués depuis la société W. où il travaillait et qu'en tant que sous-chef du personnel il avait accès aux archives de la société et, d'autre part, du fait de la relation sentimentale que M. Valenzuela avait entretenue avec Mme M. L'ordonnance du juge d'instruction se lisait ainsi :
- « Il est sollicité la mise sur table d'écoutes téléphoniques des lignes n° 641 29 25 et n° 795 22 00, appartenant à Cosme Valenzuela Contreras et à M.[S.], respectivement, installées dans cette ville, dans la rue Avda. del Oeste n° 41 de Alcorcón, le premier, et dans la rue H., le second, au motif d'investigation de certains faits délictuels sur lesquels une enquête policière active est en cours.
- Attendu que : il peut être déduit de ce qui a été exposé par la police judiciaire qu'il existe des indices bien fondés pour que des faits et des circonstances d'intérêt sur la commission d'un délit puissent être découverts par la mise sur table d'écoutes des lignes téléphoniques n° 641 29 25 et n° 795 22 00, appartenant à Cosme Valenzuela Contreras et à M.[S.], respectivement; il est pertinent de procéder à la mise sur table d'écoutes téléphoniques sollicitée, qui sera menée par les agents de la Compagnie téléphonique nationale susmentionnée, tel qu'il est autorisé par l'article 18 § 3 de la Constitution en vigueur.
- Vu, outre l'article cité, le titre VIII du livre [II] du code de procédure pénale et les autres dispositions d'application générale.
- [Le juge] dit : la mise sur table d'écoutes des lignes téléphoniques n° 641 29 25 et n° 795 22 00, respectivement, appartenant à Cosme Valenzuela Contreras et à M.[S.], qui sera menée par les fonctionnaires de la Compagnie téléphonique nationale d'Espagne pendant une période d'un mois à partir d'aujourd'hui est ordonnée; à l'échéance de cette période, ils devront rendre compte du résultat de l'intervention mentionnée.
- (...) »
15. Le 10 décembre 1985, la Direction générale de la police du ministère de l'Intérieur informa le juge d'instruction n° 1 de Madrid que la mise sur table d'écoute du numéro de téléphone de M. S. avait été infructueuse, aucun appel ou conversation suspect n'ayant été enregistré. Elle précisait en revanche que la surveillance de la ligne téléphonique de M. Valenzuela avait révélé que de nombreux appels avaient été passés depuis son téléphone vers ceux de Mme M., du fiancé de cette dernière et de leurs parents proches. Toutefois, la personne qui appelait raccrochait dès que le correspondant décrochait.
- Le même jour, la Direction générale de la police demanda au juge l'autorisation d'effectuer une perquisition au domicile de M. Valenzuela après que de nouvelles lettres injurieuses eurent été envoyées à la victime.
16. La mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique de M. Valenzuela prit fin le 20 décembre 1985, en raison d'une panne dans le système. Les cassettes originales ainsi enregistrées furent remises au juge et incluses dans le dossier judiciaire soumis à l'examen contradictoire des parties.
17. Le 27 décembre 1985, le requérant lui-même porta plainte devant le juge d'instruction n° 2 de Madrid pour menaces téléphoniques. Le 17 juin 1986, le requérant pria le juge, lors de sa comparution, d'ordonner la mise sur tables d'écoute de sa propre ligne téléphonique, ce qui ne donna aucun résultat. Le 14 juin 1988, le juge conclut à un non-lieu provisoire (*sobreseimiento provisional*).
18. Les 9 décembre 1985 et 13 janvier 1986, la Direction générale de la police confirma devant le juge d'instruction que vingt-deux appels avaient été passés à partir de la ligne téléphonique du requérant pendant la durée de la mise sur table d'écoute, dont trois au domicile de Mme M., huit à celui de M. R., deux à la tante de ce dernier et neuf à son chef.
19. Le 26 janvier 1986, le ministère public demanda l'ouverture d'une procédure pénale (*sumario*) pour délits d'injures graves et menaces à l'encontre de M. Valenzuela et, le cas échéant, de M. S.

20. Le 25 février 1986, le juge d'instruction n° 31 de Madrid ordonna des perquisitions au domicile du requérant et au siège de la société W.

21. Le 18 avril 1986, ce même juge décida d'ouvrir une procédure pénale à l'encontre de M. Valenzuela. Par une ordonnance (auto de procesamiento) du 18 avril 1986, il inculpa le requérant d'injures graves et menaces en vertu des articles 457, 458 §§ 2, 3 et 4, 459, 463 et 493 §2 du code pénal.

22. Le 26 décembre 1990, le juge d'instruction n° 27 de Madrid, qui s'était vu attribuer l'affaire le 2 janvier 1990, déclara l'instruction close et ordonna le renvoi de l'affaire en jugement devant l'Audiencia provincial de Madrid.

B. La procédure devant l'Audiencia provincial de Madrid

23. Les 25 juin et 8 juillet 1991, le ministère public ainsi que Mme M. et M. R., ces derniers en qualité de partie accusatrice privée (acusador particular), formulèrent leurs conclusions provisoires.

24. Le 7 mai 1992, le requérant fit valoir que la surveillance de sa ligne téléphonique et les perquisitions qui avaient eu lieu à son domicile avaient violé les articles 18 et 24 de la Constitution (paragraphe 29 ci-dessous).

25. Le 8 mai 1992, l'Audiencia provincial de Madrid, condamna le requérant à une peine de quatre mois d'emprisonnement, à des amendes ainsi qu'à verser des indemnités à Mme M. pour délit continu de menaces proférées pendant quatre ans, par téléphone et par lettre à l'encontre de Mme M. et de M. R., son fiancé, et de leurs familles respectives, dans leur milieu privé et professionnel.

26. Le jugement souligna qu'en tout état de cause, ni les perquisitions ni les écoutes téléphoniques ne constituaient un élément déterminant pour conclure à la culpabilité du requérant; par le biais des écoutes, il avait été constaté que certains des appels passés à partir du téléphone du requérant correspondaient au numéro de téléphone de Mme M. et que la plupart des appels litigieux avaient été passés depuis la société où tant Mme M. que le requérant travaillaient; néanmoins, l'identité de la personne qui appelait n'avait pu être déterminée dans la mesure où celle-ci raccrochait dès que le correspondant décrochait.

C. La procédure devant le Tribunal suprême

27. Le requérant forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté le 19 mars 1994 par le Tribunal suprême. En ce qui concerne les écoutes téléphoniques litigieuses, l'arrêt précisa qu'à supposer que l'autorisation judiciaire pour procéder à la mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique du requérant eût été accordée « de façon générique », ce moyen de preuve ne constituait pas le seul élément ayant emporté la conviction du tribunal a quo, et qu'en tout état de cause, les menaces litigieuses avaient été également proférées par écrit.

D. Le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel

28. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du principe de la présomption d'innocence et du droit au respect de la vie privée et familiale et du secret des communications téléphoniques (articles 24 et 18 de la Constitution) (paragraphe 29 ci-dessous). Le 16 novembre 1994, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours par les motifs suivants :

« (...) Contrairement aux arguments du requérant, aucune violation de son droit au secret des communications téléphoniques ne peut être appréciée dans la présente affaire, dans la mesure où la surveillance de sa ligne téléphonique privée avait été préalablement autorisée par une décision judiciaire motivée conformément à l'article 579 § 3 du code de procédure pénale. Il faut signaler néanmoins que ladite intervention ne donna pas des résultats déterminants permettant de conclure à la culpabilité de M. Valenzuela du chef du délit de menaces dont il était soupçonné, dans la mesure où ce qui a été seulement constaté, c'était que des appels fréquents et sans aucun contenu avaient été effectués depuis son domicile à celui de la personne menacée, puisque l'auteur desdits appels raccrochait dès que [la victime] décrochait. Ce qui a été vraiment déterminant à cet effet [conclure à la culpabilité du requérant] fut l'ensemble d'indices tels que la relation sentimentale récente du demandeur d'amparo avec [Mme M.], sa condition de sous-chef du personnel de la société dans laquelle cette dernière travaillait, le fait qu'il a été démontré que certains des appels avaient été effectués depuis ladite société, et que les photographies accompagnant certaines des lettres anonymes étaient celles des fichiers du personnel appartenant aux archives de la société, accessibles uniquement à ceux qui travaillaient dans son service du personnel, les réactions de [M. Valenzuela] pendant les débats oraux, etc. Ces indices, dûment appréciés par l'[Audiencia provincial] au moyen d'un raisonnement clair non susceptible d'être qualifié d'illogique, peuvent être considérés suffisants pour détruire la présomption d'innocence du demandeur d'amparo (...). »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La Constitution

29. Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :

Article 10 § 2

« Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l'Espagne. »

Article 18 § 3

« Le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire. »

Article 96

« Les traités internationaux régulièrement conclus, et une fois publiés officiellement en Espagne, feront partie de l'ordre juridique interne (...) ».

B. Le code de procédure pénale

1. Avant l'entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988

30. Parmi les dispositions pertinentes, du livre II du titre VIII du code de procédure pénale, portant sur l'entrée et les perquisitions dans un endroit fermé, l'examen des livres et des pièces écrites, et l'interception et l'ouverture de la correspondance écrite et télégraphique, en particulier, celles relatives à la correspondance, étaient les suivantes :

Article 579

« Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la personne mise en examen, s'il existe des indices permettant d'obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. »

Article 581

« L'agent ayant effectué la saisie de la correspondance, la remettra immédiatement au juge d'instruction. »

Article 583

« La décision motivée autorisant la saisie et le contrôle de la correspondance (...) précisera la correspondance devant être saisie ou contrôlée (...). »

Article 586

« L'opération aura lieu au moyen de l'ouverture, par le juge lui-même, de la correspondance (...). »

Article 588

« L'ouverture de la correspondance sera constatée par acte (...).

Cet acte sera signé par le juge d'instruction, le greffier et les autres personnes présentes. »

2. Depuis l'entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988

31. La loi organique 4/1998 a modifié deux articles du titre VIII du livre II (paragraphe 30 ci-dessus), les articles 553 et 579. Ce dernier, seul pertinent en l'espèce, dispose :

Article 579

« 1. Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la personne mise en examen, s'il existe des indices permettant d'obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure.

2. Le juge pourra aussi autoriser, par décision motivée, la surveillance des communications téléphoniques de la personne mise en examen, s'il existe des indices permettant d'obtenir par ce moyen la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure.

3. De la même façon, le juge pourra autoriser, par décision motivée, pour un délai maximum de trois mois, susceptible de prorogation pour des périodes similaires, la surveillance des communications postales, télégraphiques ou téléphoniques des personnes au sujet desquelles il existe des indices de responsabilité criminelle, ainsi que sur les communications servant à des fins délictuelles.

(...) »

C. La jurisprudence

32. Dans son arrêt 114/1984 du 29 novembre 1984, le Tribunal constitutionnel a précisé que le concept de « secret » ne couvre pas seulement le contenu des communications, mais aussi d'autres aspects de celles-ci comme, par exemple, l'identité subjective des interlocuteurs.

33. Dans son arrêt du 21 février 1991, le Tribunal suprême releva à l'imperfection de la modification législative opérée par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988, qui introduisit la nouvelle rédaction de l'article 579 dans le code de procédure pénale. L'arrêt précisa que les cassettes enregistrées à partir d'une intervention téléphonique devaient être mises à la disposition du juge, avec la transcription exacte de son contenu, qui devait être vérifié par le greffier, pour reproduction, le cas échéant, lors des débats oraux. Il ajouta que « si les conditions prévues par l'article 579 étaient remplies, si le juge contrôlait le résultat de l'administration de la preuve et s'il permettait sa reproduction lors des débats oraux », l'interception de la ligne téléphonique serait considérée comme une preuve valable.

34. Dans sa décision (auto) du 18 juin 1992, le Tribunal suprême interpréta la législation existant en Espagne en la matière après l'entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 (paragraphe 29 et 31). Il précisa que « le législateur n'établi[ssai]t pas de limitations en raison de la nature des possibles délits ou des peines y associées », et souligna que les lacunes, l'insuffisance et l'indétermination de cette législation devaient être comblées par la jurisprudence nationale, et par celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

A la lumière de cette dernière, la décision citée du Tribunal suprême établissait les conclusions suivantes :

« En résumé, les violations qui entraînent la nullité de la preuve obtenue par mise sur écoute téléphonique et ses effets sont les suivantes :

1. Absence d'indices. Insuffisance de motivation.

(...) Absence d'indices, selon le juge, susceptibles de justifier une mesure aussi restrictive des droits fondamentaux que l'écoute téléphonique; le simple soupçon de la police, servant en principe de base à la décision judiciaire, ne suffit pas.

2. Absence de contrôle.

Il manque un type quelconque de contrôle juridictionnel sur la réalisation concrète de l'interception du téléphone concerné, par le biais, par exemple, d'un examen des conversations enregistrées sur des durées raisonnables; il faut en effet, d'une part, vérifier la progression de l'enquête, policière dans ce cas, et toujours soumise au principe intangible de proportionnalité dont on ne peut précisément constater le respect que par la motivation et, d'autre part, décider de la nécessité ou non de poursuivre, dans les délais prévus, par le biais de prolongations de l'interception/surveillance, laquelle doit être aussi raisonnablement limitée dans le temps, selon les principes du code de procédure pénale.

3. Périodicité du contrôle. Effets.

Une fois les conversations enregistrées sur bandes, le juge doit procéder périodiquement à leur examen en présence du greffier, selon les conditions qu'il a fixées dans sa sagesse et en fonction des circonstances puis, après avoir entendu les enregistrements, il doit décider de la marche à suivre, en ordonnant de continuer ou non l'interception et en fixant, le cas échéant, des règles de bon comportement pour les agents d'exécution de cette mesure.

Si le juge ordonne de mettre fin à l'interception, ladite mesure devra être portée à la connaissance de la (ou des) personne(s) concernées (...), pour qu'elle(s) puisse(nt) éventuellement engager les actions correspondantes. (...)

Ce n'est que dans des cas exceptionnels que le secret pourra être gardé jusqu'à la fin de l'enquête, afin de ne pas compromettre l'intérêt légitime ayant suscité l'enquête, (voir arrêt CEDH du 6 septembre 1978 dans l'affaire Klass), mais il devra cependant être levé au plus tard à la fin de l'investigation (...)

4. Dissociation entre autorisation et enquête.

(...) Il y a eu violation du droit à la vie privée et, plus simplement encore, au secret des communications en général et des communications téléphoniques en particulier, (...) lorsque, au cours de l'écoute initialement autorisée, il apparaît vraisemblable qu'un ou plusieurs délits nouveaux ont été commis. A ce moment-là, (...) la police doit, immédiatement et dans la foulée, en informer le juge d'instruction qui a autorisé/ordonné la mise sur écoute, afin qu'il examine sa propre compétence et le caractère proportionné de la mesure (...). Toute autorisation générale est à proscrire, de même que la poursuite de l'interception/surveillance sans avoir obtenu auparavant une nouvelle autorisation expresse du juge, lorsqu'on s'aperçoit que le délit nouveau présumé qui se profile à travers les entretiens téléphoniques est indépendant de celui qui a motivé l'autorisation initiale. De telles situations, si elles ne sont pas contrôlables et contrôlées directement par le juge, provoquent ou peuvent provoquer une totale méconnaissance du principe de proportionnalité, dont on ne saura jamais s'il a ou non été respecté en l'espèce. (...)

5. Remise de copies au lieu d'originaux.

Il y a aussi violation de la légalité de l'interception téléphonique lorsque cette mesure n'est pas conforme à la Constitution et à l'ensemble de la législation (article 579 du code de procédure pénale). Le fait que les bandes remises au tribunal ne soient pas des originaux mais des copies, et qu'en plus, celles-ci représentent une sélection opérée par la police sans aucun contrôle juridictionnel, est une grave violation du système. (...). Car il faut que le juge, conseillé, s'il l'estime opportun, par des experts, et en présence du greffier (...), sélectionne, de la façon qui lui semble opportune, ce qui intéresse l'enquête ordonnée par lui, et qu'il laisse le reste à la garde du greffier, pour empêcher ainsi une quelconque connaissance non désirée ou indésirable de conversations n'ayant rien à voir avec la décision d'écoute. Il met aussi immédiatement fin à l'interception lorsqu'elle ne vise plus les buts légitimes de la vérification d'une infraction majeure, dont la gravité doit toujours être proportionnelle à l'ingérence, en principe intolérable, dans la vie privée. (...)

6. Constatation du caractère proportionné.

(...) Sur cette base, il faut observer la proportion ou l'écart existant entre les mesures de sûreté adoptées et le but poursuivi. (...). Le juge, garant essentiel des droits fondamentaux et des libertés publiques, doit examiner chaque infraction dans son contexte et statuer, en recherchant si les objectifs légitimes de l'enquête, du procès et, le cas échéant, de la condamnation, méritent dans le cas concret le sacrifice de biens juridiques aussi importants que la dignité, la vie privée et la liberté de la personne (...).

7. Fixation de la mesure et de ses limites.

(...) Il appartient à l'autorité judiciaire de préciser en quoi devra consister la mesure et de veiller à ce que sa réalisation soit menée à bien avec le minimum de préjudice pour l'intéressé(...) ».

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

35. M. Valenzuela Contreras a saisi la Commission le 2 mai 1995. Il alléguait qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable en ce que sa culpabilité n'avait pas été légalement établie et que la surveillance de sa ligne téléphonique avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée; il invoquait les articles 6 § 1 et 8 de la Convention.

36. Le 18 octobre 1996, la Commission a retenu le grief du requérant sur le terrain de l'article 8 et a déclaré la requête (n° 27671/95) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 11 avril 1997 (article 31), elle exprime l'opinion, par onze voix contre six, qu'il y a eu violation de l'article 8. Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt[fn4]

CONCLUSIONS PRESENTÉES A LA COUR

37. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire que la mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique du requérant n'a pas emporté violation de l'article 8 de la Convention.

38. De son côté, le requérant prie la Cour de constater qu'il y a eu violation des articles 6 et 8 de la Convention et de lui allouer une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

39. Dans son mémoire à la Cour, le requérant réitère son grief tiré de l'article 6 de la Convention, soumis par lui à la Commission et non retenu par celle-ci (paragraphe 35 et 36 ci-dessus). Il affirme que les écoutes téléphoniques litigieuses ont constitué le seul fondement de sa condamnation et sans elles, sa culpabilité n'aurait pas pu être établie.

40. Toutefois, dès lors que l'objet du litige qui lui est déféré se trouve délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité, la Cour n'a pas compétence pour faire revivre des doléances déclarées irrecevables (voir, parmi d'autres, les arrêts Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, p. 16, § 40, et Leutscher c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 434, § 22).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

41. Le requérant affirme que l'interception de ses communications téléphoniques a emporté violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

A. Sur l'applicabilité de l'article 8

42. Pour la Cour, il ressort clairement de sa jurisprudence que les appels téléphoniques provenant du domicile relèvent des notions de « vie privée » et de « correspondance » figurant à l'article 8 (arrêts Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, § 41, Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1985, série A n° 82, p. 30, § 64, et Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A, n° 176-A et B, p. 20, § 26, et p. 52, § 25, respectivement). Ce point n'a d'ailleurs pas prêté à controverse.

B. Sur l'observation de l'article 8

1. Arguments des comparants

a) Le requérant

43. Le requérant allègue pour l'essentiel que l'interception de conversations téléphoniques dont il a fait l'objet, constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée, en violation de l'article 8. Il prétend que la mesure litigieuse n'était pas énoncée dans une loi suffisamment prévisible et claire et que l'existence d'un système de surveillance des communications à caractère général et illimité serait contraire à l'article 8, d'autant plus qu'aucun contrôle judiciaire n'a été effectué en l'espèce. Il se réfère à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Malone c. Royaume Uni du 2 août 1984 (série A n° 82, pp. 32-33, § 68), et précise que la « loi », c'est-à-dire, la Constitution espagnole, d'application directe puisqu'elle est la seule loi applicable en l'espèce, ne définit pas « l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir avec une netteté suffisante - compte tenu du but légitime poursuivi - pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire ».

Il soutient que les écoutes téléphoniques ne répondaient pas aux exigences posées par la jurisprudence de la Cour notamment en ce que l'ordonnance du 19 novembre 1985 du juge d'instruction décrétant la mise sur table d'écoute de sa ligne téléphonique n'était pas suffisamment motivée. Il souligne que cette ordonnance s'apparentait à une « décision-formule », car elle ne mentionnait pas les faits sur lesquels elle se fondait ni les motifs qui avaient pu justifier une telle mesure; celle-ci serait du reste disproportionnée par rapport à la gravité du délit.

b) Le Gouvernement

44. D'après le Gouvernement, l'ingérence dans la vie privée du requérant était prévue par la loi (article 18 de la Constitution et dispositions du code de procédure pénale applicables par interprétation extensive avant la modification, en 1988, de l'article 579 du code de procédure pénal), et justifiée par la nécessité d'établir la réalité du délit en cause. Il rappelle en outre que les dispositions relatives aux droits fondamentaux sont à interpréter à la lumière de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les traités internationaux en la matière ratifiés par l'Espagne (paragraphe 29 ci-dessus).

La surveillance de la ligne téléphonique du requérant a fait l'objet d'une ordonnance dûment motivée et rendue par le juge d'instruction dans le cadre d'une procédure pénale pour injures et menaces téléphoniques et écrites. Cette mesure était nécessaire afin de découvrir ou de vérifier des faits pertinents pour la procédure. Les écoutes litigieuses étaient limitées dans le temps et les cassettes enregistrées furent retranscrites et soumises à l'examen contradictoire des parties. Par ailleurs, les numéros des téléphones visés par cette mesure et leurs titulaires étaient mentionnés dans l'ordonnance, ainsi que les dispositions légales en vertu desquelles l'interception des communications avait été décidée.

Le Gouvernement se réfère, en particulier, à une décision (auto) du Tribunal suprême du 18 juin 1992 (paragraphe 34 ci-dessus), rendue deux ans déjà avant l'arrêt du Tribunal suprême du 19 mars 1994 et la décision du Tribunal constitutionnel du 16 novembre 1994 (paragraphe 27 et 28 ci-dessus), qui précisait toutes les conditions applicables et requises en droit espagnol, comme les avait établies la jurisprudence de la Cour.

c) La Commission

45. Devant la Cour, le délégué de la Commission a rappelé qu'à l'époque des faits, le système espagnol en matière d'écoutes téléphoniques n'offrait pas des sauvegardes adéquates; il n'indiquait pas avec la clarté et les précisions exigées par la Convention l'étendue

et les modalités d'exercice du pouvoir conféré aux autorités. Bien que l'évolution législative et, en particulier, jurisprudentielle dans ce domaine soit très positive, elle ne s'est amorcée que quelques années après l'ordonnance litigieuse.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

46. De la jurisprudence de la Cour découlent les principes suivants, pertinents en l'espèce :

i. L'interception des conversations téléphoniques constitue une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance. Pareille ingérence méconnaît l'article 8 § 2 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (arrêt Kopp c. Suisse du 25 mars 1998, Recueil 1998-..., p., § 50).

ii. Les mots « prévue par la loi » veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne. Cependant, cette expression ne se borne pas à renvoyer au droit interne, mais concerne aussi la qualité de la « loi »; elle la veut compatible avec la prééminence du droit, impliquant ainsi que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1 (arrêt Malone précité, p. 32, § 67). De cette exigence dérive la nécessité de l'accessibilité de la loi pour la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle (arrêts Kruslin précité, p. 20, § 27, et Kopp précité, p., § 55).

iii. Le danger d'arbitraire apparaît avec une netteté singulière là où un pouvoir d'appréciation s'exerce en secret. Lorsqu'il s'agit de mesures secrètes de surveillance ou de l'interception de communications par les autorités publiques, l'exigence de prévisibilité implique que le droit interne doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à prendre pareilles mesures (arrêts Malone précité, pp. 31-32, §§ 66, 67, Kruslin précité, pp. 22-23, § 30, Halford précité, p. 1017, § 49, et Kopp précité, p., § 64). L'existence de règles claires et détaillées en la matière apparaît indispensable, d'autant que les procédés techniques ne cessent de se perfectionner (arrêts Kruslin et Huvig précités, p. 23, § 33, et p. 55, § 32 respectivement, et Kopp précité, p., § 72).

iv. Comme sauvegardes minimales, nécessaires pour éviter les abus, qui doivent figurer dans la loi, les arrêts Kruslin et Huvig, mentionnent : la définition des catégories de personnes susceptibles d'être mises sous écoute judiciaire; la nature des infractions pouvant y donner lieu; la fixation d'une limite à la durée de l'exécution de la mesure; les conditions d'établissement des procès-verbaux de synthèse consignants les conversations interceptées; les précautions à prendre pour communiquer, intacts et complets, les enregistrements réalisés, aux fins de contrôle éventuel par le juge et par la défense; les circonstances dans lesquelles peut ou doit s'opérer l'effacement ou la destruction desdites bandes, notamment après un non-lieu ou une relaxe (loc. cit., p. 24, § 35, et p. 56, § 34 respectivement)

b) Application de ces principes en l'espèce

1. Existence d'une ingérence

47. La mise sur écoute de la ligne téléphonique de M. Valenzuela Contreras entre le 26 novembre et le 20 décembre 1985 (paragraphe 14 et 16 ci-dessus) constitue une « ingérence d'une autorité publique » au sens de l'article 8 § 2, dans l'exercice par le requérant du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Ce point n'a d'ailleurs pas prêté à controverse. Il n'est pas décisif, à cet égard, que le système utilisé ait été un simple « comptage » comme l'affirme le Gouvernement (arrêt Malone, précité, p. 38 § 87).

2. Justification de l'ingérence

48. Il y a lieu de rechercher si une telle ingérence cadre avec les exigences du paragraphe 2 de l'article 8.

i. L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ?

49. Nul ne conteste l'existence d'une base légale en droit espagnol en la matière. La Cour se borne donc à constater que l'article 18 § 3 de la Constitution, sur lequel le juge d'instruction a principalement fondé l'ordonnance décrétant la surveillance de la ligne téléphonique du requérant, prévoit que « le secret des communications et, en particulier des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire » (paragraphe 14 et 29 ci-dessus).

50. La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase « prévue par la loi », l'accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun problème en l'occurrence.

51. Il n'en va pas de même de la troisième, la prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables.

52. D'après le Gouvernement, l'ensemble des textes législatifs pertinents et la jurisprudence du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel (paragraphe 29, 30, 32-34 ci-dessus) permettent de conclure que les écoutes téléphoniques ordonnées en l'espèce répondaient bien à l'exigence de prévisibilité telle que définie par la Cour européenne.

53. La Cour doit donc examiner la « qualité » des normes juridiques applicables à M. Valenzuela Contreras en l'espèce.

54. Elle relève tout d'abord que la ligne téléphonique du requérant fut mise sur écoute en vertu de l'article 18 § 3 de la Constitution, seul article prévoyant la possibilité, au moment où la mise sur écoute fut ordonnée, de limiter le droit au secret des communications téléphoniques (paragraphe 29 ci-dessus). Elle observe toutefois que le juge ayant ordonné ladite mesure prit en compte, pour justifier sa décision, le titre VIII du livre II du code de procédure pénale en vigueur à l'époque, portant « sur l'entrée et les perquisitions dans un endroit fermé, l'examen des livres et des pièces écrites et l'interception et l'ouverture de la correspondance écrite et télégraphique » (paragraphe 14 et 30 ci-dessus)

55. Selon le Gouvernement, le juge qui a ordonné la surveillance de la ligne téléphonique du requérant a, en l'espèce, respecté les garanties préconisées par la jurisprudence de la Cour en la matière : il a indiqué l'identité et les numéros de téléphone de deux suspects, précisé que l'intervention servait aux besoins d'une investigation de certains faits sur lesquels une enquête policière était en cours, limité la

durée de ladite intervention à un mois et contrôlé l'exécution de la mesure ordonnée. Le juge d'instruction aurait par conséquent anticipé, cinq ans avant le prononcé des arrêts *Kruslin c. France* et *Huvig c. France*, les sauvegardes et garanties contre l'arbitraire qui y figurent.

56. La Cour reconnaît que le juge d'instruction a tenté d'assurer un maximum de protection en ce qui concerne l'exécution de la mesure de surveillance ordonnée, dans le cadre des dispositions légales en vigueur à l'époque. Il a en effet tenu compte, du moins d'une manière générale, des dispositions du code de procédure pénale « portant sur l'entrée et les perquisitions dans un endroit fermé, l'examen des livres et des pièces écrites et sur l'interception et l'ouverture de la correspondance écrite et télégraphique » (paragraphe 14 ci-dessus) qui pourraient fonder sa décision.

57. Cependant, il échet de constater que les garanties citées par le Gouvernement (paragraphe 55 ci-dessus), déduites d'une interprétation extensive de dispositions législatives ou de décisions judiciaires, ne ressortaient pas des propres termes de l'article 18 § 3 de la Constitution, ni même, dans leur plus grande partie, des dispositions du code de procédure pénale que le juge a considérées dans l'ordonnance décrétant l'interception des communications téléphoniques du requérant (paragraphe 14 et 30 ci-dessus).

58. La Cour est consciente des efforts déployés par le législateur et le pouvoir judiciaire afin d'introduire, dans la législation et la pratique espagnoles, les garanties exigées par la Convention en la matière : la décision (auto) du Tribunal suprême du 18 juin 1992 (paragraphe 34 ci-dessus) en constitue le meilleur exemple. Avec le délégué de la Commission, la Cour relève toutefois que cette évolution a eu lieu bien plus tard que l'ordonnance décrétant la mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique du requérant.

La Cour note également qu'en tout état de cause, ladite décision du Tribunal suprême interprète non pas la législation applicable au moment où l'intervention téléphonique a été ordonnée, mais celle résultant de la modification opérée en vertu de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 (paragraphe 31 ci-dessus), qui a introduit la notion d'écoutes téléphoniques dans l'article 579 du code de procédure pénale.

59. La Cour relève que certaines des conditions découlant de la Convention, nécessaires pour assurer la prévisibilité de la « loi » et garantir par conséquent le respect de la vie privée et de la correspondance, ne sont incluses ni dans l'article 18 § 3 de la Constitution ni dans les dispositions du code de procédure pénale citées dans l'ordonnance du 19 novembre 1985 (paragraphe 14 et 30 ci-dessus), notamment la définition des catégories de personnes susceptibles d'être mises sous écoute judiciaire, la nature des infractions pouvant y donner lieu, la fixation d'une limite à la durée de l'exécution de la mesure, les conditions d'établissement des procès-verbaux de synthèse consignants les conversations interceptées, et l'utilisation et l'effacement des enregistrements réalisés (paragraphe 46 iv) ci-dessus).

60. A l'instar du délégué de la Commission, la Cour ne saurait tenir compte de l'argument du Gouvernement selon lequel le juge ayant ordonné l'interception des communications téléphoniques du requérant ne pouvait pas être tenu de connaître, cinq ans avant le prononcé, en 1990, des arrêts *Kruslin* et *Huvig*, de telles conditions. Elle rappelle que les conditions portant sur la qualité de la loi mentionnées dans les arrêts cités par le Gouvernement, dérivent de la Convention elle-même. De l'exigence de prévisibilité de la « loi » il découle que, dans le contexte de l'interception des communications téléphoniques, les garanties qui précisent l'étendue et les modalités du pouvoir d'appréciation des autorités doivent figurer en détail dans le droit interne, ayant de cette sorte une force contraignante qui circonscrit le pouvoir discrétionnaire du juge dans l'application desdites mesures (paragraphe 46 iii) et iv) ci-dessus). Par conséquent, la « loi » espagnole que le juge d'instruction devait appliquer aurait dû prévoir, avec suffisamment de précision, ces garanties. La Cour note par ailleurs, qu'au moment où la surveillance de la ligne téléphonique du requérant a été ordonnée, elle avait déjà précisé, dans un arrêt constatant une violation de l'article 8, que « la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à opérer pareille atteinte secrète, et virtuellement dangereuse, au droit au respect de la vie privée et de la correspondance » (arrêt *Malone* précité, p. 32, § 67). De plus, elle souligne qu'en tout état de cause, le juge d'instruction qui décréta l'interception des communications téléphoniques du requérant a lui-même appliqué un certain nombre de garanties qui n'ont été précisées, comme l'affirme le Gouvernement, que par une jurisprudence bien ultérieure.

61. En résumé, le droit espagnol, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de clarté au moment des faits l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré. *M. Valenzuela Contreras* n'a donc pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (arrêt *Malone* précité, p. 36, § 79). Il y a donc eu violation de l'article 8.

ii. Finalité et nécessité de l'ingérence

62. Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour, à l'instar de la Commission, n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION

63. Le requérant sollicite une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention, ainsi libellé :

« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »

A. Dommage

64. Le requérant réclame 1 304 181 pesetas pour le préjudice matériel subi en raison de sa condamnation, correspondant à l'indemnité qu'il a dû verser à Mme M., à l'amende infligée et à la partie de frais de justice qu'il a supportée devant l'Audiencia provincial de Madrid.

65. Le Gouvernement estime que dans les circonstances de l'espèce, le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. Le délégué de la Commission ne se prononce pas.

66. La Cour estime qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la violation constatée de l'article 8 et le dommage matériel allégué et qui correspondrait aux montants que le requérant s'est vu contraint à payer en raison de sa condamnation pour délit de menaces. Il échet donc de rejeter la demande.

B. Frais et dépens

67. Le requérant sollicite 1 500 000 pesetas au titre des dépens et honoraires d'avocat devant le Tribunal constitutionnel et les organes de la Convention.

68. Le Gouvernement estime raisonnables ces demandes.

69. Le délégué de la Commission ne prend pas position.

70. Statuant en équité et à l'aide des critères qu'elle applique en la matière, la Cour accorde la somme réclamée en entier.

C. Intérêts moratoires

71. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Espagne à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1. Dit qu'elle n'a pas compétence pour examiner le grief tiré de l'article 6 de la Convention;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention;

3. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 000 (un million cinq cent mille) pesetas pour frais et dépens;

b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 30 juillet 1998.

Signé : Rudolf Bernhardt

Président

Signé : Herbert Petzold

Greffier

Footnotes

[fn1]. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.(Revenir à FN1)

[fn2]. L'affaire porte le n° 58/1997/842/1048 Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction (second chiffre), les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. (Revenir à FN2)

[fn3]. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déferées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.(Revenir à FN3)

[fn4]. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique, il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1998) mais chacun peut se le procurer auprès du greffe(Revenir à FN4)

VERSION OFICIAL EN INGLÉS

SENTENCIA

In the case of Valenzuela Contreras v. Spain[fn2],

The European Court of Human Rights, sitting, in accordance with Article 43 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") and the relevant provisions of Rules of Court A[fn3], as a Chamber composed of the following judges:

Mr R. Bernhardt, President,

Mrs E. Palm,

Mr A.N. Loizou,

Mr J.M. Morenilla,

Sir John Freeland,

Mr A.B. Baka,

Mr L. Wildhaber,

Mr J. Casadevall,

Mr V. Butkevych,

and also of Mr H. Petzold, Registrar, and Mr P.J. Mahoney, Deputy Registrar,

Having deliberated in private on 28 March and 30 June 1998,

Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:

PROCEDURE

1. The case was referred to the Court by the European Commission of Human Rights ("the Commission") on 29 May 1997, within the three-month period laid down by Article 32 § 1 and Article 47 of the Convention. It originated in an application (no. 27671/95) against the Kingdom of Spain lodged with the Commission under Article 25 by a Spanish national, Mr Cosme Valenzuela Contreras, on 2 May 1995.

The Commission's request referred to Articles 44 and 48 and to the declaration whereby Spain recognised the compulsory jurisdiction of the Court (Article 46). The object of the request was to obtain a decision as to whether the facts of the case disclosed a breach by the respondent State of its obligations under Article 8 of the Convention.

2. In response to the enquiry made in accordance with Rule 33 § 3 (d) of Rules of Court A, the applicant stated that he wished to take part in the proceedings and designated the lawyer who would represent him (Rule 30). The lawyer was given leave by the President to use the Spanish language (Rule 27 § 3).

3. The Chamber to be constituted included *ex officio* Mr J.M. Morenilla, the elected judge of Spanish nationality (Article 43 of the Convention), and Mr R. Ryssdal, the President of the Court (Rule 21 § 4 (b)). On 27 August 1997, in the presence of the Registrar, the President of the Court drew by lot the names of the other seven members, namely Mr B. Walsh, Mrs E. Palm, Mr A.N. Loizou, Mr A.B. Baka, Mr L. Wildhaber, Mr J. Casadevall and Mr V. Butkevych (Article 43 in fine of the Convention and Rule 21 § 5). Subsequently Mr R. Bernhardt, the Vice-President of the Court, replaced Mr Ryssdal, who had died on 18 February 1998 (Rule 21 § 6, second sub-paragraph) and Sir John Freeland, substitute judge, replaced Mr Walsh, who had died on 9 March 1998 (Rule 22 § 1).

4. As President of the Chamber (Rule 21 § 6), Mr Ryssdal, acting through the Registrar, had consulted the Agent of the Spanish Government ("the Government"), the applicant's lawyer and the Delegate of the Commission on the organisation of the proceedings (Rules 37 § 1 and 38). Pursuant to the order made in consequence on 30 September 1997, the Registrar received the applicant's and Government's memorials on 15 December 1997. On 19 January 1998 the Secretary to the Commission informed the Registrar that the Delegate did not wish to reply in writing.

5. On 19 January 1998 the Commission produced the file on the proceedings before it, as requested by the Registrar on the President's instructions.

6. In accordance with the decision of the President, who had also given the Agent of the Government leave to address the Court in Spanish (Rule 27 § 2), the hearing took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 26 March 1998. The Court had held a preparatory meeting beforehand.

There appeared before the Court:

(a) for the Government

Mr J. BORREGO BORREGO, Head of the Legal Department

for the European Commission and Court of
Human Rights, Ministry of Justice, Agent;

(b) for the Commission

Mr M. A. NOWICKI, Delegate;

(c) for the applicant

Mr J.-C. RUBIO MORENO, of the Madrid Bar, Counsel.

The Court heard addresses by Mr Nowicki, Mr Rubio Moreno and Mr Borrego Borrego.

AS TO THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

7. The applicant is a Spanish citizen and was born in 1952. He is the deputy head of personnel of the W. company.

A. Background to the case and the inquiry

8. On 12 November 1984, following a complaint lodged by Mrs M., an employee of the W. company, with Madrid investigating judge no. 31 against a person or persons unknown in respect of insulting and threatening telephone calls and letters she had received, a criminal investigation (*diligencias previas*) was started. On 6 February 1985 Mrs M.'s fiancé, Mr R, lodged a complaint against a person or persons unknown for the same offence.

9. On 8 January and 19 February 1985, the investigating judge made orders under Article 18 § 3 of the Constitution for Mrs M.'s and Mr R.'s telephone lines to be tapped for a month, as they had requested when making their statement. Several suspect calls made from the W. company and from telephone boxes were intercepted.

10. On 18 February and 25 March 1985 respectively the monitoring ceased.

11. On 29 March 1985 Mrs M. gave the investigating judge the names of the five people, including the applicant, who had access to the telephone at the W. company from which some of the suspect calls had been made.

That same day three other people were summonsed to appear. The W. company was asked to provide information about the offices in which the telephones concerned were located and the people having access to them.

12. On 30 April 1985 the investigating judge made a further order for Mrs M.'s and Mr R.'s telephone lines to be tapped, on this occasion from 1 to 31 May 1985. He also ordered an analysis of the typeface of the anonymous letters containing threats against Mrs M. (in order to determine the make of typewriter used) and of photographs enclosed with some of the letters. In addition, he had the saliva residue and the fingerprints on the envelopes examined.

13. On 7 June 1985 the cassette recording of the calls made on the monitored lines, some of which showed that Mrs M. had been subjected to threats and insults, was delivered to the investigating judge.

14. On 19 November 1985 the investigating judge made an order under Article 18 § 3 of the Constitution (see paragraph 29 below) and Chapter VIII of Volume II of the Code of Criminal Procedure "on the entry into and searches of closed premises, the opening of books and written documents and the interception and opening of written and telegraphic correspondence" (see paragraph 30 below), for the monitoring of the private telephone lines of S. and of Mr Valenzuela, the head and deputy head of personnel of the company where the applicant worked, for a period of one month commencing on 26 November 1985. The applicant was considered to be the prime suspect, firstly, because most of the calls were being made from the W. company, where he worked and where, as assistant personnel manager, he had access to the company's staff files and, secondly, because he had previously had a relationship with Mrs. M. The investigating judge's order read as follows:

"An application has been made for an order for the monitoring of telephone lines nos. 641 29 25 and 795 22 00, of Cosme Valenzuela Contreras and Mr [S.] respectively, who reside in this town, Mr Valenzuela Contreras at Avda. del Oeste no. 41 de Alorcón and Mr [S.] in H. Street, in connection with a police investigation currently under way into certain offences.

It is implicit in what has been said by the police that reliable evidence exists to suggest that information concerning the commission of an offence may be obtained by monitoring telephone lines nos. 641 29 25 and 795 22 00 belonging to Cosme Valenzuela Contreras and Mr [S.] respectively; it is appropriate to grant the requested application authorising the monitoring, in accordance with Article 18 § 3 of the Constitution as in force. It will be carried out by agents of the National Telephone Company referred to above.

Having considered, in addition to the Article cited above, Chapter VIII of the Volume of the Code of Criminal Procedure and other provisions of general application,

[The judge] orders that the telephone lines nos. 641 29 25 and 795 22 00 of Cosme Valenzuela Contreras and Mr [S.] respectively shall be monitored by staff of the National Telephone Company of Spain for a period of one month starting from today; at the end of that period they shall report their findings.

..."

15. On 10 December 1985 police headquarters at the Ministry of the Interior informed the Madrid no. 1 investigating judge that the monitoring of Mr [S]'s line had not revealed anything suspect, no suspicious call or conversation having been recorded. Conversely, the monitoring of Mr Valenzuela's line had shown that a number of calls had been made from his telephone to Mrs M., her fiancé and their close relatives. However, the caller had hung up as soon as the telephone was answered.

On the same day, after further insulting letters had been sent to Mrs M., police headquarters applied for a warrant from the judge to carry out a search of Mr Valenzuela's home.

16. Owing to a breakdown in the system, the applicant's telephone line ceased to be tapped on 20 December 1985. The original cassettes containing the recordings were delivered to the investigating judge and included in the court file that was available for inspection and comment by the parties.

17. On 27 December 1985 the applicant himself applied to the Madrid no. 2 investigating judge, complaining that he had received threatening telephone calls. On 17 June 1986 the applicant requested the judge to order the monitoring of the applicant's own telephone line; that measure proved fruitless. On 14 June 1988 the judge made a provisional discharge order (sobreseimiento provisional).

18. On 9 December 1985 and 13 January 1986 police headquarters confirmed before the investigating judge that twenty-two calls had been made from the applicant's telephone while it was being tapped, three to Mrs M.'s home, eight to Mr R.'s home, two to Mr R's aunt and nine to his superior.

19. On 26 January 1986 the Public Prosecutor applied for criminal proceedings (sumario) to be brought against Mr Valenzuela and, if appropriate, Mr S., for offences of proffering grave insults and making threats.

20. On 25 February 1986 Madrid investigating judge no. 31 ordered that the applicant's home and the head office of the W. company be searched.

21. On 18 April 1986 he decided to institute criminal proceedings against Mr Valenzuela. In an order (auto de procesamiento) of 18 April 1986 he charged the applicant with proffering grave insults and making threats under Articles 457, 458 §§ 2, 3 and 4, 459, 463 and 493 § 2 of the Criminal Code.

22. On 26 December 1990 Madrid investigating judge no. 27, to whom the case had been assigned on 2 January 1990, closed the investigation and committed the applicant for trial before the Madrid Audiencia Provincial.

B. Proceedings before the Madrid Audiencia Provincial

23. On 25 June and 8 July 1991 the Public Prosecutor, and Mrs M. and Mr R. as private prosecutors (acusadores particulares), filed provisional submissions.

24. On 7 May 1992 the applicant argued that the monitoring of his telephone line and searches of his house constituted breaches of Articles 18 and 24 of the Constitution (see paragraph 29 below).

25. On 8 May 1992 the Madrid Audiencia Provincial convicted the applicant of making threats by letter and on the telephone against Mrs M. and Mr R., her fiancé, and their respective families, both at their homes and at work. It sentenced him to four months' imprisonment, imposed a number of fines and ordered him to pay Mrs M. compensation.

26. The Audiencia Provincial found that neither the searches nor the monitoring had been decisive in establishing the applicant's guilt. The monitoring had revealed that some of the calls from his home telephone had been made to Mrs M.'s telephone number and that most of the calls complained of had been made from the company where both Mrs M. and the applicant worked. Nevertheless, it had not proved possible to determine the identity of the person making the calls because he had hung up as soon as the telephone was answered.

C. Proceedings before the Supreme Court

27. The applicant lodged an appeal on points of law, which the Supreme Court dismissed on 19 March 1994. It held with regard to the telephone tapping that, even if the court order allowing the applicant's telephone line to be monitored had been couched in general terms, the evidence thereby obtained had not been the only evidence on which the trial court had relied in convicting him and, in any event, the threats had also been made in writing.

D. The amparo appeal to the Constitutional Court

28. The applicant then filed an amparo appeal with the Constitutional Court in which he relied on the principle of the presumption of innocence, on the right to respect for his private and family life and on the confidentiality of telephone communications (Articles 24 and 18 of the Constitution - see paragraph 29 below). That appeal was dismissed on 16 November 1994 for the following reasons:

"... Contrary to what is said by the applicant, there has been no breach of his right to make telephone communications in confidence in the present case, since the monitoring of his telephone line had previously been authorised in a reasoned court order made under Article 579 § 3 of the Code of Criminal Procedure. It must nevertheless be noted that the monitoring failed to produce any decisive results enabling the conclusion to be reached that Mr Valenzuela had been guilty of making the threats of which he was suspected, inasmuch as the only finding was that frequent calls in which the caller had remained silent had been made from his home to the home of the person receiving the threats, as the caller had hung up as soon as [the victim] answered. The decisive factor in this respect [the finding that the applicant was guilty] was the evidence as a whole including the amparo appellant's recent relationship with [Mrs M.], the fact that he was the deputy head of personnel in the company where she worked, the fact that it had been shown that some of the calls had been made from that company's premises, the fact that the photographs enclosed with some of the anonymous letters were from the company's archives to which only members of the personnel department had access, [Mr Valenzuela's] reactions during the oral hearing etc. That evidence, which was properly reviewed by the [Audiencia provincial] in a clearly reasoned judgment that was not illogical, may be considered to have been sufficient to rebut the presumption that the appellant was innocent..."

II. RELEVANT DOMESTIC LAW

A. The Constitution

29. The relevant provisions of the Constitution read as follows:

Article 10 § 2

"The rules relating to the fundamental rights and the freedoms recognised under the Constitution shall be construed in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and the international treaties and agreements concerning the same subject matter that have been ratified by Spain."

Article 18 § 3

"Communications, particularly postal, telegraphic and telephone communications, shall be confidential unless the court decides otherwise."

Article 96

"Properly concluded international treaties shall form part of the domestic legal order once they have been published in Spain..."

B. Code of Criminal Procedure

1. Before Implementing Law no. 4/1988 of 25 May 1988 came into force

30. The relevant provisions of Volume II of Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure "on the entry into and searches of closed premises, the opening of books and written documents and the interception and opening of written and telegraphic correspondence" were as follows:

Section 579

"A court may authorise the seizure, opening and examination of private postal and telegraphic correspondence sent or received by a person charged if there is reason to believe that facts or circumstances material to the case may thereby be uncovered or verified."

Section 581

"The officer who seizes the correspondence shall immediately hand it to the investigating judge."

Section 583

"The decision, which shall be reasoned, authorising the seizure and inspection of correspondence... shall specify which correspondence is to be seized or inspected..."

Section 586

"The procedure shall take place by the judge himself opening the correspondence..."

Section 588

"The fact that the correspondence has been opened shall be noted in a record...

The record thereof shall be signed by the investigating judge, the registrar and any other persons present."

2. Since Implementing Law no. 4/1988 of 25 May 1988 came into force

31. The Organic Law no. 4/1988 amended two Articles of Chapter VIII of Volume II (see paragraph 30 above), namely Articles 553 and 579. Of these, only Article 579 is relevant in the present case and it now provides:

Section 579

"(1) A court may authorise the seizure, opening and examination of private postal and telegraphic correspondence sent or received by a person charged if there is reason to believe that facts or circumstances material to the case may thereby be uncovered or verified.

(2) A court may also authorise, in a reasoned decision, the monitoring of the telephone calls of a person charged if there is evidence to show that facts or circumstances material to the case may thereby be uncovered or verified.

(3) Likewise, a court may, in a reasoned decision, authorise for a maximum renewable period of three months the monitoring of the postal, telegraphic and telephonic communications of persons reasonably believed to have committed an offence and of communications made for criminal ends.

..."

C. The case-law

32. In its judgment no. 114/1984 of 29 November 1984 the Constitutional Court held that the concept of "confidentiality" did not cover just the content of communications, but also other aspects of them such as the subjective identity of the people communicating.

33. In its judgment of 21 February 1991 the Supreme Court noted that the legislative amendment made by Organic Law no. 4/1998 of 25 May 1988, bringing in the new wording of Article 579 of the Code of Criminal Procedure, was not perfect. The court said that cassette recordings of telephone conversations should be put at the disposal of the judge with an accurate transcript, which was to be checked by the registrar for use at the trial if appropriate. It added "if the conditions laid down by Article 579 are satisfied, if the judge has reviewed the content of the evidence so obtained and has given leave for it to be used at the trial", evidence obtained from telephone tapping may be considered admissible.

34. In a decision (auto) of 18 June 1992 the Supreme Court construed the Spanish legislation on the admissibility of evidence obtained by telephone tapping as it stood after the Organic Law no. 4/1988 of 25 May 1988 had come into force (see paragraphs 29 and 31 above). It stated that "the legislature [had] not specified any limitations according to the nature of the possible offence or the sentence it carried" and emphasised that the deficiencies, inadequacies and vagueness of that legislation needed to be rectified by the case-law of the domestic courts and of the European Court of Human Rights.

In the light of the latter Court's case-law, the Supreme Court reached the following conclusions in its decision:

"In summary, the violations that render evidence obtained from telephone tapping inadmissible and determine its effects are as follows:

(1) Lack of evidence. Lack of sufficient reasoning

Lack... of evidence capable, in the judge's view, of justifying a measure restricting fundamental rights to the extent telephone-tapping does; mere suspicion on the part of the police, which in principle serves as the basis for the court's decision, cannot suffice.

(2) Lack of supervision

There was an almost total lack of any form of judicial supervision of the actual monitoring of the telephone concerned, which must necessarily be effected in compliance with the proportionality principle, which indeed can only be established through the reasoning, by, for example, listening to conversations recorded over reasonable periods in order for progress in the investigation (in this case a police investigation) to be checked and a decision taken as to whether or not expressly to extend the measure/surveillance - which, moreover, should not be for more than a reasonable period - in accordance with the principles laid down by the Code of Criminal Procedure.

(3) Periodic review. Effects

Once the conversations have been recorded on the tapes, the judge must periodically, in the manner he deems appropriate in the light of all the circumstances, examine them in the presence of the court registrar and, after hearing the recorded voices, decide on the proper course of action and, if appropriate, order that the monitoring continue, in which case he determines the appropriate guidelines to be followed by those responsible for implementing the measure.

If he orders that the measure should cease, the person or persons affected by that measure must be informed of the operation that has ended... so that they may henceforth take such action as they deem appropriate....

Only in exceptional cases can the measure remain secret until the end of the investigation so as not to frustrate the legitimate interest in pursuing it... but it must cease to remain secret once the investigation has ended...

(4) Divergence between the monitoring and the investigation

... There is a violation of the right to private life or, even more simply, the confidentiality of communications in general and of telephone communications in particular where..., during the course of the originally authorised monitoring, it appears possible that one or more new offences may have been committed. At that point... the police must, without delay, immediately inform the investigating judge who authorised/ordered the monitoring so that he may consider the question of his jurisdiction and the requirement of proportionality....

A blanket authorisation may not be given; nor, without a fresh, express authority from the judge, can the measure/surveillance continue if the new presumed offence revealed on the telephone

is found to be independent of the offence covered by the original authorisation. Such situations, if uncontrollable and not directly supervised by the judge, cause or are apt to cause a total failure to comply with the proportionality principle. It will never be known whether or not that principle was complied with in the present case...

(5) Production of copies rather than originals

There will also be a violation where the measure fails to comply with the Constitution and all the legislation (Article 579 of the Code of Criminal Procedure). The fact that the tape recordings produced to the court were copies, not originals, and moreover represented a selection made by the police without any judicial supervision, is a serious violation of the system.... as the judge, in the registrar's presence, must select, in the manner he deems appropriate, what is relevant to the investigation ordered by him while the remaining recordings must be kept in the registrar's custody, thereby precluding any undesired or undesirable knowledge of conversations beyond the scope of the decision to monitor. The judge must order the immediate cessation of the measure when it is no longer relevant to the legitimate aim of establishing the commission of a serious offence, whose gravity must always be proportionate to what is, in principle, an intolerable interference with private life....

(6) Finding of proportionality

On that basis, it is necessary to consider whether or not the preventive measures used were proportionate to the aim pursued.... The judge, who is the essential guarantor of fundamental rights and public freedoms, must consider each offence in the light of all the circumstances and decide whether the legitimate interests in investigation, prosecution and, where appropriate, conviction warrant in a given case the sacrifice of legal interests as important as the dignity, privacy and freedom of the individual...

(7) Determination of the measure and its limits

... The judicial authority must state what form the measure is to take and ensure that it is implemented with the least possible harm to the person affected by it..."

PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION

35. Mr Valenzuela Contreras applied to the Commission on 2 May 1995. He relied on Article 6 § 1 and Article 8 of the Convention, complaining that he had not had a fair hearing in that his guilt had not been established by lawful means and that the monitoring of his telephone line had infringed his right to respect for his private life.

36. On 18 October 1996 the Commission declared the application (no. 27671/95) admissible as regards the applicant's complaint under Article 8 and inadmissible as to the remainder. In its report of 11 April 1997 (Article 31), it expressed the opinion that there had been a violation of Article 8 (eleven votes to six). The full text of the Commission's opinion and of the dissenting opinion contained in the report is reproduced as an annex to this judgment[fn4].

FINAL SUBMISSIONS TO THE COURT

37. In their memorial the Government invited the Court to hold that the monitoring of the applicant's telephone line had not constituted a violation of Article 8 of the Convention.

38. The applicant requested the Court to hold that there had been a breach of Articles 6 and 8 of the Convention and to award him just satisfaction under Article 50 of the Convention.

AS TO THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 OF THE CONVENTION

39. In his memorial to the Court, the applicant repeated the complaint he had submitted to the Commission under Article 6 of the Convention, which the Commission had declared inadmissible (see paragraphs 35 and 36 above). He affirmed that the only basis for his conviction had been the evidence obtained from monitoring his telephone and that without it, his guilt could not have been established.

40. However, since the compass of the case before it is delimited by the Commission's decision on admissibility, the Court has no jurisdiction to revive issues declared inadmissible (see, among other authorities, the *Masson and Van Zon v. the Netherlands* judgment of 28 September 1995, Series A no. 327-A, p. 16, § 40 and the *Leutscher v. the Netherlands* judgment of 26 March 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-II, p. 434, § 22).

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION

41. The applicant maintained that the interception of his telephone communications amounted to a violation of Article 8 of the Convention, which provides:

"1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others."

A. Applicability of Article 8

42. The Court considers that it is clear from its case-law that telephone calls from a person's home come within the notions of "private life" and "correspondence" referred to in Article 8 (see the following judgments: *Klass and Others v. Germany* of 6 September 1978, Series A no. 28, p. 21, § 41, *Malone v. the United Kingdom* of 2 August 1985, Series A no. 82, p. 30, § 64, and *Kruslin v. France and Huvig v. France* of 24 April 1990, Series A, no. 176-A and B, p. 20, § 26, and p. 52, § 25, respectively). Indeed, the point was not disputed.

B. Compliance with Article 8

1. Arguments of those who appeared before the Court

(a) The applicant

43. The applicant's main contention was that the interception of his telephone conversations amounted to an unjustified interference in the exercise of his right to respect for his private life, in breach of Article 8. He argued that the statutory basis for the measure in issue was not sufficiently foreseeable and clear and that the existence of a general and unrestricted system for monitoring communications was contrary to Article 8, especially as there had been no judicial supervision in the instant case. He referred to the Court's judgment in the case of *Malone v. the United Kingdom* of 2 August 1984 (Series A no. 82, pp. 32-33, § 68) and said that the "law", namely the Spanish Constitution, which was of direct application as no other law was applicable in the present case, did not define "the extent of any such power or the manner of its exercise with a degree of clarity that - having regard to the legitimate aim pursued - was sufficient to give the individual adequate protection against arbitrary interference".

He submitted that the tapping of the telephones did not satisfy the requirements laid down by the Court's case-law, in particular in that the investigating judge had not given sufficient reasons in his order of 19 November 1985 for requiring the applicant's telephone line to be monitored. The applicant emphasised that that order was akin to a "standard-form decision", since it contained no mention of the facts on which it was based or of the reasons that could have justified such a measure; furthermore, the measure was disproportionate to the seriousness of the offence.

(b) The Government

44. In the Government's submission, the interference in the applicant's private life was in accordance with the law (see Article 18 of the Constitution and the provisions of the Code of Criminal Procedure that were applicable under a wide construction of Article 579 of the Code of Criminal Procedure, before its amendment in 1988) and justified by the need to establish that the offence in question had been committed. They also pointed out that the provisions relating to fundamental rights are to be construed in the light of the Universal Declaration of Human Rights and the international treaties which Spain had ratified on the subject (see paragraph 29 above).

The order for the monitoring of the applicant's telephone line had been made by the investigating judge in a properly reasoned decision in connection with criminal proceedings brought for insulting and threatening telephone calls and letters. The measure had been necessary in order to discover or to verify facts relevant to the proceedings. The monitoring had been limited in time and the cassette recordings had been transcribed and made available for inspection and comment by both parties. Moreover, the telephone numbers and the names of the subscribers to which the measure related were mentioned in the order, as were the statutory provisions on which the decision to intercept communications was based.

The Government referred in particular to a decision (auto) of the Supreme Court of 18 June 1992 (see paragraph 34 above) that had been delivered two years before the Supreme Court's judgment of 19 March 1994 and the Constitutional Court's decision of 16 November 1994 (see paragraphs 27 and 28 above), in which all the necessary conditions applicable under Spanish law, as established by the Court's case-law, were set out.

(c) The Commission

45. Before the Court, the Delegate of the Commission pointed out that at the material time the Spanish system governing the monitoring of telephones did not provide adequate safeguards; it did not indicate with the clarity and precision required by the Convention the scope and manner of exercise of the power conferred on the authorities. Although the legislation and, in particular, the case-law in that sphere had evolved in a very positive way, that evolution had not begun until several years after the order in issue had been made.

2. The Court's assessment

(a) General principles

46. The following principles relevant in the instant case have been established by the Court in its case-law:

(i) The interception of telephone conversations constitutes an interference by a public authority in the right to respect for private life and correspondence. Such an interference will be in breach of Article 8 § 2 unless it is "in accordance with the law", pursues one or more legitimate aims under paragraph 2 and, in addition, is "necessary in a democratic society" to achieve those aims (see the *Kopp v. Switzerland* judgment of 25 March 1998, Reports 1998-..., p...., § 50).

(ii) The words "in accordance with the law" require firstly that the impugned measure should have some basis in domestic law. However, that expression does not merely refer back to domestic law but also relates to the quality of the law, requiring it to be compatible with the rule of law. The expression thus implies that there must be a measure of protection in domestic law against arbitrary interference by public authorities with the rights safeguarded by paragraph 1 (see the *Malone* judgment cited above, p. 32, § 67). From that requirement stems the need for the law to be accessible to the person concerned, who must, moreover, be able to foresee its consequences for him (see the *Kruslin* judgment cited above p. 20, § 27 and the *Kopp* judgment cited above, p...., § 55).

(iii) Especially where a power of the executive is exercised in secret the risks of arbitrariness are evident. In the context of secret measures of surveillance or interception by public authorities, the requirement of foreseeability implies that the domestic law must be sufficiently clear in its terms to give citizens an adequate indication as to the circumstances in and conditions on which public authorities are empowered to take any such secret measures (see the *Malone* judgment cited above pp. 31-32, § 66-67, the *Kruslin* judgment cited above pp. 22-23, § 30; the *Halford v. the United Kingdom* judgment of 25 June 1997, Reports 1997-III, p. 1017, § 49 and the *Kopp* judgment cited above, p...., § 64). It is essential to have clear, detailed rules on the subject, especially as the technology available for

use is constantly becoming more sophisticated (see the *Kruslin* judgment cited above, p. 23, § 33, the *Huvig* judgment cited above, p. 55, § 32 and the *Kopp* judgment cited above, p., § 72).

(iv) The *Kruslin* and *Huvig* judgments mention the following minimum safeguards that should be set out in the statute in order to avoid abuses of power: a definition of the categories of people liable to have their telephones tapped by judicial order, the nature of the offences which may give rise to such an order, a limit on the duration of telephone tapping, the procedure for drawing up the summary reports containing intercepted conversations, the precautions to be taken in order to communicate the recordings intact and in their entirety for possible inspection by the judge and by the defence and the circumstances in which recordings may or must be erased or the tapes destroyed, in particular where an accused has been discharged by an investigating judge or acquitted by a court (loc. cit. p. 24, § 35 and p. 56, § 34 respectively).

(b) Application of these principles in the instant case

1. Whether there has been an interference

47. The tapping of Mr Valenzuela Contreras's telephone line between 26 November and 20 December 1985 (see paragraphs 14 and 16 above) constitutes an "interference by a public authority" within the meaning of Article 8 § 2 in the applicant's exercise of his right to respect for his private life and correspondence. Indeed, that point was not disputed. Nor is it decisive in that regard that, as the Government intimated, only a "metering" system was used (see the *Malone* judgment cited above, p. 38, § 87).

2. Was the interference justified?

48. It is necessary to examine whether that interference satisfied the requirements of paragraph 2 of Article 8.

(i) Was the interference "in accordance with the law"?

49. It is not contested that there was a legal basis in Spanish law for such a measure. The Court therefore confines itself to noting that Article 18 § 3 of the Constitution, on which the investigating judge principally based the order for the applicant's telephone line to be monitored, provides that "communications, particularly postal, telegraphic and telephone communications, should be confidential unless the court decides otherwise" (see paragraphs 14 and 29 above).

50. The second requirement resulting from the phrase "in accordance with the law", namely that the law be accessible, does not give rise to any problem in the present case.

51. That is not true of the third requirement, namely that the law be foreseeable as regards the meaning and nature of the applicable measures.

52. The Government submitted that the relevant statutory provisions and the case-law of the Supreme Court and the Constitutional Court taken as a whole (see paragraphs 29, 30 and 32-34 above) warranted the conclusion that the telephone tapping ordered in the present case satisfied the foreseeability requirement as laid down by the European Court.

53. The Court must therefore assess the quality of the legal rules that were applied in Mr Valenzuela Contreras's case.

54. It notes, firstly, that the applicant's telephone line was tapped under Article 18 § 3 of the Constitution, which was the only provision allowing, at the time the order for the telephone tapping was made, restrictions on the right to confidentiality of telephone communications (see paragraph 29 above). It observes, however, that in order to justify his decision the judge who ordered the measure took into account Chapter VIII of Volume II of the Code of Criminal Procedure, which was in force at the time, "on the entry into and searches of closed premises, the opening of books and written documents and the interception and opening of written and telegraphic correspondence" (see paragraphs 14 and 30 above).

55. The Government submitted that the judge who had ordered the monitoring of the applicant's telephone line had, in the instant case, complied with the safeguards recommended by the Court in that connection. He had indicated the identity and telephone numbers of the two suspects, stated that the measure was being taken for the purposes of an investigation into certain events into which a police inquiry was under way, limited the duration of the measure to one month and supervised its enforcement. The investigating judge had consequently anticipated the safeguards and guarantees against arbitrariness specified in the *Kruslin v. France* and *Huvig v. France* judgments five years before those judgments were delivered.

56. The Court recognises that the investigating judge attempted to ensure maximum protection with respect to the enforcement of the monitoring order under the legal provisions in force at the time. He had taken into account, at least in a general way, those provisions of the Code of Criminal Procedure "on entry into and searches of closed premises, the opening of books and written documents and the interception and opening of written and telegraphic correspondence" (see paragraph 14 above) capable of serving as a basis for his decision.

57. However, it has to be noted that the guarantees cited by the Government (see paragraph 55 above), deduced from a wide construction of statutory provisions or court decisions, were not apparent from the actual wording of Article 18 § 3 of the Constitution, or, for the most part, from the provisions of the Code of Criminal Procedure which the judge considered when ordering the monitoring of the applicant's telephone communications (see paragraphs 14 and 30 above).

58. The Court is aware of the efforts made by the legislature and the judicial authorities to introduce in both legislation and practice in Spain, the guarantees required in this sphere by the Convention. The Supreme Court's decision (auto) of 18 June 1992 (see paragraph 34 above) provides the best example. The Court, like the Delegate of the Commission, notes, however, that those developments took place well after the order for the tapping of the applicant's telephone line had been made.

The Court also notes that, in any event, in the decision referred to above, the Supreme Court did not interpret the legislation applicable when the order for the monitoring of the applicant's telephone was made, but the legislation as amended by the Organic Law no. 4/1988

of 25 May 1988 (see paragraph 31 above), by which the notion of telephone tapping was inserted into Article 579 of the Code of Criminal Procedure.

59. The Court notes that some of the conditions necessary under the Convention to ensure the foreseeability of the effects of the "law" and, consequently, to guarantee respect for private life and correspondence are not included either in Article 18 § 3 of the Constitution or in the provisions of the Code of Criminal Procedure cited in the order of 19 November 1985 (see paragraphs 14 and 30 above). They include, in particular, the conditions regarding the definition of the categories of people liable to have their telephones tapped by judicial order, the nature of the offences which may give rise to such an order, a limit on the duration of telephone tapping, the procedure for drawing up the summary reports containing intercepted conversations and the use and destruction of the recordings made (see paragraph 46 (iv) above).

60. Like the Delegate of the Commission, the Court cannot accept the Government's argument that the judge who ordered the monitoring of the applicant's telephone conversations could not have been expected to know the conditions laid down in the *Kruslin* and *Huvig* judgments five years before those judgments were delivered in 1990. It reiterates that the conditions referred to in the judgment cited by the Government concerning the quality of the law stem from the Convention itself. The requirement that the effects of the "law" be foreseeable means, in the sphere of monitoring telephone communications, that the guarantees stating the extent of the authorities' discretion and the manner in which it is to be exercised must be set out in detail in domestic law so that it has a binding force which circumscribes the judges' discretion in the application of such measures (see paragraph 46 (iii) and (iv) above). Consequently, the Spanish "law" which the investigating judge had to apply should have provided those guarantees with sufficient precision. The Court further notes that at the time the order for the monitoring of the applicant's telephone line was made it had already stated, in a judgment in which it had found a violation of Article 8, that "the law must be sufficiently clear in its terms to give citizens an adequate indication as to the circumstances in and the conditions on which public authorities are empowered to resort to this secret and potentially dangerous interference with the right to respect for private life and correspondence" (see the *Malone* judgment cited above, p. 32, § 67). In addition, it points out that in any event the investigating judge who ordered the monitoring of the applicant's telephone communications had himself put in place a number of guarantees which, as the Government said, did not become a requirement of the case-law until much later.

61. In summary, Spanish law, both written and unwritten, did not indicate with sufficient certainty at the material time the extent of the authorities' discretion in the domain concerned or the way in which it should be exercised. Mr Valenzuela Contreras did not, therefore, enjoy the minimum degree of legal protection to which citizens are entitled under the rule of law in a democratic society (see the *Malone* judgment cited above, p. 36 § 79). There has therefore been a violation of Article 8.

(ii) Aim of the interference and the need for it

62. Having regard to the foregoing conclusion, the Court, like the Commission, does not consider it necessary to consider whether the other requirements of paragraph 2 of Article 8 were complied with in the instant case.

III. APPLICATION OF ARTICLE 50 OF THE CONVENTION

63. The applicant claimed just satisfaction under Article 50 of the Convention, which provides:

"If the Court finds that a decision or a measure taken by a legal authority or any other authority of a High Contracting Party is completely or partially in conflict with the obligations arising from the... Convention, and if the internal law of the said Party allows only partial reparation to be made for the consequences of this decision or measure, the decision of the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party."

A. Damage

64. The applicant sought 1,304,181 pesetas for the pecuniary damage sustained as a result of his conviction, corresponding to the compensation he had had to pay to Mrs M., the fine imposed on him and the portion of legal costs he had had to bear before the Madrid *Audencia Provincial*.

65. The Government argued that in the circumstances of the case the present judgment would in itself constitute sufficient just satisfaction. The Delegate of the Commission expressed no view.

66. The Court considers that there is no causal link between the finding of a violation of Article 8 and the alleged pecuniary damage corresponding to the amounts the applicant had to pay as a result of his conviction for making threats. The claim must therefore be dismissed.

B. Costs and expenses

67. The applicant sought 1,500,000 pesetas for the expenses and lawyer's fees incurred before the Constitutional Court and the Convention institutions.

68. The Government considered those claims reasonable.

69. The Delegate of the Commission did not express a view.

70. Making its assessment on an equitable basis having regard to the criteria it applies in such circumstances, the Court grants the sum claimed in full.

C. Default interest

71. According to the information available to the Court, the statutory rate of interest applicable in Spain at the date of adoption of the present judgment is 7.5% per annum.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

1. Holds that it has no jurisdiction to consider the applicant's complaint under Article 6 of the Convention;

2. Holds that there has been a violation of Article 8 of the Convention;

3. Holds:

(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months, 1,500,000 (one million five hundred thousand) pesetas for costs and expenses;

(b) that simple interest at an annual rate of 7.5% shall be payable on that sum from the expiry of the above-mentioned three months until settlement;

4. Dismisses the remainder of the claim for just satisfaction.

Done in English and in French, and delivered at a public hearing at the Human Rights Building, Strasbourg, on 30 July 1998.

Signed: Rudolf Bernhardt

President

Signed: Herbert Petzold

Registrar

Footnotes

[fn1]. This summary by the registry does not bind the Court.(Back to FN1)

[fn2]. The case is numbered 58/1997/842/1048. The first number is the case's position on the list of cases referred to the Court in the relevant year (second number). The last two numbers indicate the case's position on the list of cases referred to the Court since its creation and on the list of the corresponding originating applications to the Commission.(Back to FN2)

[fn3]. Rules of Court A apply to all cases referred to the Court before the entry into force of Protocol No. 9 (1 October 1994) and thereafter only to cases concerning States not bound by that Protocol. They correspond to the Rules that came into force on 1 January 1983, as amended several times subsequently.(Back to FN3)

[fn4]. Note by the Registrar. For practical reasons this annex will appear only with the printed version of the judgment (in Reports of Judgments and Decisions 1998), but a copy of the Commission's report is obtainable from the registry.(Back to FN4)